

La consulta plantea, si al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la Seguridad Social puede comunicar datos sanitarios a las entidades colaboradoras con la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.1d) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

En primer lugar es preciso destacar que los términos de la consulta, resultan excesivamente confusos, no constando de forma clara quién solicita la información, en virtud de que título y que tipo de información solicita.

La comunicación solicitada por la entidad colaboradora constituye una cesión o comunicación de los datos de dicho trabajador, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Encontrándonos por tanto en presencia de datos de salud, definidos en el artículo 5.1 g) del Real Decreto 1720/2007 que define los datos relacionados con la salud de las personas “Las informaciones concernientes a la salud, pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética”, sigue por tanto el criterio mantenido por la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos de 24 de enero de 2003.

En relación con la comunicación de los datos referidos en la consulta, hay que tener en cuenta el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto reiteradamente de manifiesto que la aplicación del artículo 7.3 implica, por mor del principio de especialidad, la imposible aplicación a los datos referidos en el mismo de cualquiera de las causas legitimadoras del tratamiento previstas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, quedando limitados los supuestos habilitantes del tratamiento y cesión de estos datos a los establecidos en la norma especial o a aquéllos en los que la norma general se refiere expresamente a tales datos (como sucede en relación con los datos de salud en el artículo 11.2 f) de la Ley Orgánica 15/1999).

En consecuencia, los datos sanitarios del trabajador sólo podrán ser comunicados cuando una Ley lo prevea expresamente o cuando éste otorgue su consentimiento expreso.



La Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, regula en su artículo 77 la colaboración de las empresas, señalando al efecto que “1. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes: (...) d) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones económicas por incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en las condiciones que establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por otro lado, dado que en la consulta se alude al parte de baja por incapacidad temporal, el Real Decreto 515/1997, de 18 de abril por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal, señala en su artículo 1.2 que “2. Todo parte médico de baja irá precedido de un reconocimiento médico del trabajador que permita la determinación objetiva de la incapacidad temporal para el trabajo habitual, a cuyo efecto el médico requerirá al trabajador los datos necesarios que contribuyan a precisar la patología objeto de diagnóstico. En todo caso, el original del parte de baja y la copia a remitir a la Entidad Gestora o, en su caso, a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social deberán contener el diagnóstico y la descripción de las limitaciones en la capacidad funcional del trabajador, así como una previsión de la duración del proceso patológico.”

Además el artículo 2 del mismo Real Decreto señala que “ (...)2. El Servicio de Salud remitirá directamente a la Entidad Gestora o a la Mutua, según corresponda, una copia del parte médico de baja con el contenido que establece el artículo 1.2 , en el plazo de cinco días contados desde el momento de su expedición.

A su vez, el facultativo que expida el parte médico de baja entregará al trabajador dos copias del mismo, uno para el interesado y otro con destino a la empresa.

En el plazo de tres días contados a partir del mismo día de la expedición del parte médico de baja, el trabajador entregará a la empresa la copia a ella destinada. La empresa cumplimentará los apartados correspondientes a ésta, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 de abril de 1983, por la que se dictan normas a efectos de control de la situación de incapacidad temporal en el sistema de la Seguridad Social, y remitirá la misma, debidamente sellada y firmada, a la Entidad Gestora en el plazo de cinco días contados a partir del mismo día de su recepción, utilizando a tal efecto cualquier medio autorizado que permitía dejar constancia del hecho de la comunicación.

En el caso de que la baja se derive de enfermedad común o accidente no laboral, y la empresa hubiese concertado la cobertura de esta prestación con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, la

empresa remitirá la copia a que se refiere el párrafo anterior a la respectiva Mutua.

No será obligatoria la remisión por la empresa, con destino a la Entidad Gestora, de la copia del parte médico de baja, cuando la misma haya asumido el pago de la misma, en régimen de colaboración voluntaria, en los términos establecidos en la Orden de 25 de noviembre de 1966 .

3. Los partes de confirmación de baja y de alta deberán remitirse a la Entidad Gestora o a la Mutua, según corresponda, en la misma forma establecida en el apartado anterior, siendo de aplicación a estos efectos las obligaciones que se imponen en el mismo a los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores y a las empresas sobre entrega, cumplimentación y remisión de los partes de baja, así como los plazos a que se sujeta su cumplimiento.(..)"

Podemos concluir a la vista de los artículos transcritos que sí deberá de comunicarse a las entidades colaboradoras con la Seguridad Social, los partes de baja, pero solamente éstos con la información que reglamentariamente viene establecida en los mismo, no pudiendo por tanto, hacerles entrega de todos los datos sanitarios o historia clínica del trabajador, primero porque no hay Ley que legitime dicha cesión y en segundo lugar porque la misma resultaría excesiva y desproporcionada vulnerando el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que establece que "Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido."